

**INFORME FINAL DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE
LAS XLIX PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL
INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO.**

INTRODUCCIÓN

Tras la conclusión de las fases de oposición y de concurso-oposición de las XLIX pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2014, el tribunal calificador emite este informe que comprende los siguientes aspectos y que sirven como estructura del mismo:

1. Desarrollo cronológico del proceso y ritmo de los ejercicios
2. Datos sobre candidatos presentados y aspirantes aprobados
3. Contenidos de cada uno de los ejercicios, especialmente de los ejercicios primero, segundo y cuarto ejercicios.

1. DESARROLLO CRONOLÓGICO Y RITMO DE LOS EJERCICIOS.

En virtud del Real Decreto 228/2014, de 4 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 10), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014, se aprobó la Orden HAP/1540/2014, de 30 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. («Boletín Oficial del Estado» del 27 de agosto).

La constitución del Tribunal se produjo el 16 de septiembre de 2014 y en esta reunión adoptó sus primeros acuerdos. Se fijó el sábado 15 de noviembre la celebración del primer ejercicio de la oposición, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

El 9 de octubre de 2015 se celebró el sorteo público conforme al que se estableció el orden de intervención de los aspirantes en los diferentes ejercicios del proceso selectivo, cuyo resultado fue el siguiente:

Turno (ingreso libre/promoción interna):

- 1º. Promoción interna
- 2º. Ingreso libre

Especialidades:

- 1º. Técnicas
- 2º. Económicas
- 3º. Sociales
- 4º. Jurídicas

Para el segundo ejercicio el orden de actuación resultante del sorteo fue el siguiente:

Idioma obligatorio:

- 1º. Inglés
- 2º. Francés

Idioma voluntario:

- 1º. Alemán
- 2º. Inglés
- 3º. Francés

Las lecturas del primer ejercicio se produjeron entre el martes 19 de noviembre y el martes 23 de diciembre de 2014 en la sede principal del Instituto Nacional de Administración Pública, en el orden alfabético de actuación establecido en la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas («BOE» de 13 de febrero), comenzando por los candidatos cuyo primer apellido se iniciara por la letra “C”.

El ritmo de las sesiones de lectura de este ejercicio fue de ocho candidatos por la mañana y seis por la tarde, de lunes a viernes en turnos de mañana y de tarde, a excepción del viernes que sólo se desarrollaría en turno de mañana.

El viernes 23 de diciembre de 2014 se dictó la resolución por la que se aprobaba la relación definitiva de aspirantes que habían superado el primer ejercicio.

Mediante resolución del tribunal de 14 de enero de 2015 se convocó la realización del segundo ejercicio.

Las pruebas escritas de idiomas, correspondientes al segundo ejercicio, se celebraron de manera conjunta (idioma obligatorio e idioma voluntario) el sábado 31 de enero de 2015, en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública. La lectura de la traducción y del resumen comprensivo y la prueba oral de cada uno de los candidatos se desarrolló entre el lunes 2 de febrero y el viernes 13 de febrero en el Instituto Nacional de Administración Pública, para el examen obligatorio; y entre el lunes 16 y el martes 17 de febrero para el voluntario. Para el orden de las lecturas se siguió el resultante del sorteo anteriormente mencionado.

El ritmo de las sesiones en este ejercicio fue en general de ocho candidatos por la mañana y seis por la tarde, excluidos los viernes por la tarde.

El 18 de febrero de 2015 se publicó la relación de aspirantes que habían superado el segundo ejercicio obligatorio y voluntario, y se anunció la convocatoria para la realización del tercer ejercicio.

El tercer ejercicio, de carácter oral, se desarrolló desde el lunes 2 al viernes 27 de marzo de 2015, con un ritmo de cuatro candidatos en las sesiones de mañana y tres en las sesiones de tarde, salvo las sesiones del 3 de marzo de 2015 por la tarde, en la fueron convocados tres aspirantes, y del 27 de marzo por la mañana, en la que fueron convocados cuatro aspirantes. El orden de intervención de las especialidades fue el mismo que en el primer ejercicio, de acuerdo con el sorteo de 9 de octubre de 2014.

El 27 de marzo de 2015 se publicó la relación de aspirantes que habían superado el tercer ejercicio. La convocatoria del cuarto ejercicio se realizó mediante resolución de 13 de abril para desarrollarse el sábado 25 de abril de 2015 a las 16:00 horas en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública.

El cuarto ejercicio se desarrolló de manera conjunta ese día para todas las especialidades. Las lecturas del mismo tuvieron lugar entre el lunes 27 de abril y el miércoles 13 de mayo, actuando cuatro o cinco candidatos en las sesiones de mañana y tres o cuatro en las de tarde.

El miércoles 13 de mayo el Tribunal, reunido en pleno, fijó e hizo pública mediante Resolución la lista de aspirantes que habían aprobado el cuarto ejercicio, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna. Asimismo aprobó la lista de aspirantes que han superado estas XLIX pruebas selectivas, y abrió la fase de concurso para el candidato que se había presentado por el sistema de promoción interna que había superado la fase de oposición.

El siguiente cuadro resume el calendario de ejecución de las pruebas aquí descrito:

EJERCICIO	FECHA DE CONVOCATORIA	FECHA DE REALIZACIÓN	INICIO LECTURAS/EXAMEN	FINAL LECTURAS/EXAMEN	PUBLICACIÓN LISTA APROBADOS
PRIMERO	17.OCT.2014	15.NOV.2014	19.NOV.2014	23.DIC.2014	27.DIC.2014
SEGUNDO	14.ENE.2015	31.ENE.2015			17.FEB.2015
OBLIGATORIO			2.FEB.2015	12.FEB.2015	
VOLUNTARIO			13.FEB.2015	16.FEB.2015	
TERCERO	17.FEB.2015		2.MAR.2015	27.MAR.2015	27.MAR.2015
CUARTO	13.ABR.2015	25.ABR.2015	27.ABR.2015	13.MAY.2015	14.MAY.2015

Una vez recibida la documentación relativa a los méritos correspondientes a la fase de concurso para la candidata que había aprobado la fase oposición por el turno de promoción interna, el Tribunal calificador publicó el 10 de junio la valoración provisional de los méritos, y el 24 de junio, tras la conformidad expresa de la única interesada, la definitiva.

Finalmente, en el Boletín Oficial del Estado de 15 de julio de 2015 se publicó la Orden HAP/1410/2015, de 9 de julio, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

2. DATOS SOBRE CANDIDATOS PRESENTADOS Y ASPIRANTES APROBADOS

Mediante Resolución de 16 de octubre de 2014 (Boletín Oficial del Estado núm. 256, de 22 de octubre), se aprobó el listado definitivo de opositores admitidos y excluidos a las pruebas selectivas. De acuerdo con la misma, se contabilizaron un total de:

Instancias presentadas	479
Aspirantes admitidos	426
Aspirantes excluidos	53

El desglose por turnos y especialidades de los aspirantes admitidos fue el siguiente:

ACCESO LIBRE

Especialidad	General	M	H	Reserva discapacidad	M	H	TOTAL
Económicas	15	7	8	-	-	-	15
Sociales	153	78	75	3	-	3	156
Jurídicas	186	114	72	11	2	9	197
Técnicas	10	5	5	2	1	1	12
TOTAL	364	204	161	16	3	13	380

PROMOCIÓN INTERNA

Especialidad	TOTAL	M	H
Económicas	4	3	1
Sociales	10	3	7
Jurídicas	31	15	16
Técnicas	1	-	1
TOTAL	46	21	25

IDIOMA OBLIGATORIO	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
INGLÉS	359	192	167
FRANCÉS	67	36	31
IDIOMA VOLUNTARIO			
INGLÉS	10	1	9
FRANCÉS	88	45	43
ALEMÁN	16	9	7

PRIMER EJERCICIO: presentados 321/lectura 282					
APROBADOS					
TURNO	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
GENERAL	122	111	11	73	49
DISCAPACITADOS	2	2	0	0	2
TOTAL	124	113	11	73	51
ESPECIALIDAD	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
TÉCNICAS	3	2	1	1	2
JURÍDICAS	51	44	7	33	18
ECONÓMICAS	3	2	1	2	1
SOCIALES	67	65	2	37	30
TOTAL	124	113	11	73	51

SEGUNDO EJERCICIO: presentados 119/lectura 119

APROBADOS (INCLUIDOS 3 EXENTOS)

IDIOMA OBLIGATORIO					
TURNO	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
GENERAL	89	81	8	50	39
DISCAPACITADOS	0	0	0	0	0
TOTAL	89	81	8	50	39

INGLÉS	74	66	8	40	34
FRANCES	15	15	0	10	5
TOTAL	89	81	8	50	39

IDIOMA VOLUNTARIO					
TURNO	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
GENERAL	13	12	1	6	7
DISCAPACITADOS	0	0	0	0	0
TOTAL	13	12	1	6	7

INGLÉS	3	3	0	2	1
FRANCES	10	9	1	4	6
ALEMÁN	0	0	0	0	0
TOTAL	13	12	1	6	7

TERCER EJERCICIO: presentados 88					
APROBADOS					
TURNO	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
GENERAL	48	46	2	29	19
DISCAPACITADOS	0	0	0	0	0
TOTAL	48	46	2	29	19
ESPECIALIDAD	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
TÉCNICAS	0	0	0	0	0
JURÍDICAS	20	18	2	14	6
ECONÓMICAS	1	1	0	0	1
SOCIALES	27	27	0	15	12
TOTAL	48	46	2	29	19

CUARTO EJERCICIO: presentados 48					
APROBADOS					
TURNO	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
<i>GENERAL</i>	20	19	1	12	8
<i>DISCAPACITADOS</i>	0	0	0	0	0
<i>TOTAL</i>	20	19	1	12	8
ESPECIALIDAD	ASPIRANTES	LIBRE	PROMOCIÓN	MUJERES	HOMBRES
<i>TÉCNICAS</i>	0	0	0	0	0
<i>JURÍDICAS</i>	9	8	1	7	2
<i>ECONÓMICAS</i>	0	0	0	0	0
<i>SOCIALES</i>	11	11	0	5	6
<i>TOTAL</i>	20	19	1	12	8

Cuarto ejercicio

3. CONTENIDOS DE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS, ESPECIALMENTE DE LOS EJERCICIOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO EJERCICIOS.

Primer ejercicio

Los temas propuestos por el tribunal figuran en el anexo 1 de este informe.

La propuesta de temas se elaboró por el tribunal calificador en una sesión de mañana convocada al efecto el mismo día 15 de noviembre de 2014 en que los candidatos fueron convocados para desarrollar por escrito el primer ejercicio por la tarde.

Segundo ejercicio

Los textos propuestos por el tribunal figuran en el anexo 1 de este informe.

El tribunal designó como expertos especialistas a funcionarios del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (dos de inglés, dos de francés y uno de alemán). Estos expertos especialistas apoyaron al tribunal en la preparación, en la celebración de las pruebas el 31 de enero de 2015 y en todas las sesiones de lectura.

Cuarto ejercicio

Los supuestos prácticos propuestos por el tribunal figuran en el anexo 3 de este informe.

Este ejercicio se ha realizado por medios electrónicos de acuerdo con la convocatoria y sobre la base de la experiencia del tribunal de las XLVIII pruebas selectivas.

Con carácter previo, el tribunal informó a los opositores mediante nota informativa de 27 de marzo de 2015, de las características generales del ejercicio y que fueron las siguientes:

Para la realización del ejercicio se dispondrá del sistema operativo Windows 7 y del paquete Office 2010. El ejercicio se redactará en una plantilla al efecto en soporte Word 2010. Para las especialidades en que resultara, en su caso, necesario, también se dispondrá de la aplicación Excel 2010.

Durante el desarrollo del ejercicio no se dispondrá de salida exterior a través de Internet ni de acceso a ninguna base de datos. El Tribunal pondrá a disposición de

los opositores en formato .pdf los textos jurídicos –como los códigos electrónicos del Boletín Oficial del Estado, así como la documentación y materiales que se estimen pertinentes para la realización del ejercicio. No estará habilitada la función de cortar y pegar desde esta documentación. No obstante, esta función estará habilitada entre documentos en soporte Word 2010 y/o Excel 2010 que elabore el propio opositor.

El Tribunal puso a disposición de los opositores los supuestos prácticos que debían desarrollar en formato electrónico, los cuales se incluyen como anexo 3.

El ejercicio se desarrolló de la siguiente forma:

- Se puso a disposición de cada opositor un ordenador en el que se hallaban previamente cargados el enunciado del supuesto correspondiente a su especialidad y los materiales que el tribunal consideró oportuno poner a su disposición exclusivamente en soporte electrónico.
- El ejercicio se debía redactar en una plantilla de Word desarrollada por el INAP, fácil de utilizar y con todas las garantías de integridad del correspondiente archivo, que fue cargada en todos los ordenadores y en la que quedaron grabados los datos personales de cada opositor una vez que los introdujo al comienzo del ejercicio, mostrándose los mismos de forma automática en cada página del ejercicio que el aspirante escribía.
- A efectos de garantizar la integridad, trazabilidad y autenticidad de los ejercicios, en cada puesto se instaló una memoria (*pen drive*) en el que se grababa periódicamente a lo largo de las cuatro horas de desarrollo del ejercicio, copias sucesivas de la plantilla sobre la que cada aspirante estaba desarrollando su prueba. Una vez terminado el tiempo de desarrollo de la prueba, se imprimieron por cada opositor dos copias en papel del mismo. Todo ello (la memoria y las dos copias en papel) fueron introducidas por cada opositor en un sobre que se les entregó y en el que debieron escribir sus datos personales, antes de cerrarlo y rubricarlo.

El día en que cada opositor fue convocado a la lectura del ejercicio, abría el sobre en el que había introducido su ejercicio y extraía las dos copias en papel. Una de ellas se la entregaba al secretario del tribunal para seguir la lectura, y la otra la utilizaba él mismo para exponer su ejercicio al tribunal. La memoria permanecía en el sobre para el caso en que hubiera habido algún problema con la copia impresa del examen, cosa que no se produjo en ningún caso.

Por otra parte, el tribunal con carácter previo a la realización del ejercicio, adoptó una serie de medidas a fin de garantizar el buen desarrollo del mismo y poder, en la medida de lo posible, adelantarse a cualquier contingencia técnica que pudiera suceder. En concreto, se planificó junto al Instituto Nacional de Administración Pública respecto a la celebración del ejercicio:

- La presencia de personal informático especializado del propio INAP.
- La existencia de más ordenadores que aspirantes, para posibilitar cambios, de surgir cualquier problema.
- La existencia de dos impresoras por aula para imprimir los exámenes.
- La realización periódica de copias de seguridad de los ejercicios, garantizándose en todo caso la integridad de los exámenes. La realización de copias de seguridad se consideró importante en beneficio de los propios aspirantes, para así prevenir posibles borrados accidentales de los ejercicios por parte de los mismos.

La celebración del ejercicio se desarrolló sin ninguna incidencia de consideración.

ANEXO 1

PRIMER EJERCICIO

**PRIMER EJERCICIO. XLIX PRUEBAS SELECTIVAS
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO**

15 de noviembre de 2015

COMUNES

Potencias emergentes y nuevo orden internacional: implicaciones en los ámbitos político, económico y de seguridad.

Desafección política y legitimidad de las instituciones públicas: origen, causas y posibles soluciones.

TÉCNICAS

La neutralidad en la red y las prácticas restrictivas de acceso a datos o servicios en la red. Análisis de los aspectos técnicos, sociales, económicos y políticos.

El uso de las redes sociales para la gestión de la inteligencia colectiva en la coproducción de servicios públicos. Oportunidades y riesgos.

ECONÓMICAS

Incremento de la desigualdad salarial en la OCDE desde la década de 1980: razones económicas.

Productividad y competitividad. El impacto de las políticas de oferta. Especial referencia a España.

SOCIALES

El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. Especial referencia al derecho al olvido en internet.

Nuevas formas de prestación de servicios públicos. Retos en los actuales procesos de descentralización y supranacionalidad.

JURÍDICAS

Balance y perspectivas de futuro del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

El control interno y externo de las administraciones públicas. Perspectivas jurídica, política y financiera.

ANEXO 2

SEGUNDO EJERCICIO

PRIMERA PRUEBA INGLÉS: TRADUCCIÓN

What is the data revolution for sustainable development?

Data are the lifeblood of decision-making and the raw material for accountability. Without high-quality data providing the right information on the right things at the right time designing, monitoring and evaluating effective policies becomes almost impossible. Without data, we cannot know how many people are born and at what age they die; how many men, women and children still live in poverty; how many children need educating; how many doctors to train or schools to build; how public money is being spent and to what effect; whether greenhouse gas emissions are increasing or the fish stocks in the ocean are dangerously low; how many people are in what kinds of work, what companies are trading and whether economic activity is expanding.

New technologies are leading to an exponential increase in the volume and types of data available, creating unprecedented possibilities for informing and transforming society and protecting the environment. Governments, companies, researchers and citizen groups are in a ferment of experimentation, innovation and adaptation to the new world of data, a world in which data are bigger, faster and more detailed than ever before. This is the data revolution. Some are already living in this new world. But too many people, organisations and governments are excluded because of lack of resources, knowledge, capacity or opportunity. There are huge and growing inequalities in access to data and information and in the ability to use it.

Data needs improving. Despite considerable progress in recent years, whole groups of people are not being counted and important aspects of people's lives and environmental conditions are still not measured. For people, this can lead to the denial of basic rights, and for the planet, to continued environmental

degradation. Too often, existing data remain unused because they are released too late or not at all, not well documented and harmonized, or not available at the level of detail needed for decision-making. As the world embarks on an ambitious project to meet new Sustainable Development Goals, there is an urgent need to mobilise the data revolution for all people and the whole planet in order to monitor progress, hold governments accountable and foster sustainable development. More diverse, integrated, timely and trustworthy information can lead to better decision-making and real-time citizen feedback. This in turn enables individuals, public and private institutions, and companies to make choices that are good for them and for the world they live in.

This report sets out the main opportunities and risks presented by the data revolution for sustainable development. Seizing these opportunities and mitigating these risks requires active choices, especially by governments and international institutions. Without immediate action, gaps between developed and developing countries, between information-rich and information-poor people, and between the private and public sectors will widen, and risks of harm and abuses of human rights will grow.

As with any change, the data revolution comes with a range of new risks, posing questions and challenges concerning the access to and use of data, and threatening a growing inequality in access to and use of information. These risks must be addressed.

Fundamental elements of human rights have to be safeguarded: privacy, respect for minorities or data sovereignty requires us to balance the rights of individuals with the benefits of the collective. The growing gap between the data people actively offer and the amounts of “massive and passive” data being generated and mediated by third parties fuels anxiety among individuals and communities. There

is a longer-term cost if a breakdown in trust between people and the institutions that have access to their data means that people do not feel confident giving consent to uses of their data for the social good, such as to track patterns of disease or assess inequalities.

PRIMERA PRUEBA INGLÉS: RESUMEN EN INGLES

The relationship between the right to adequate food and emergencies:

A basic human right recognized in widely accepted international legal instruments (e.g. *Universal Declaration on Human Rights*), the right to adequate food is a right of every man, woman and child, alone or in community with others, to have physical and economic access to quantitatively and qualitatively sufficient food through production, procurement or, in some cases, provision. It is primarily a right to feed oneself in dignity; it is not a right to be provided free food. States and their organs have corresponding duties to respect (not to interfere with), to protect (from interference by third parties) and to fulfil the enjoyment of the right by creating a conducive environment or provide for people who are unable to feed themselves. The obligation of states is to realize the right progressively, but this does not mean that they can postpone the fulfilment of the right indefinitely. Freedom from hunger and non-discrimination in the enjoyment of the right are considered to be among the immediately realizable minimum components of the right to adequate food. Emergencies provide a typical example of situations that necessitate the provision of food. Disasters such as drought, floods, hurricanes, earthquakes and armed conflicts cause the failure of governance structures, destroy sources of food and production capacity, interrupt food supply and market access, erode savings and livelihoods and challenge food preparation and hygienic practices. These in turn decrease food consumption and dietary diversity, which affect the quantitative and qualitative aspects, respectively, of the right to adequate food.

In relation to emergencies, FAO works to help countries prevent, mitigate, prepare for and respond to various types of disasters by focusing on strengthening their ability to mitigate the impact of such disasters on food security, devising programmes for transition from relief to development, reducing vulnerability and building national and household resilience. The revised strategic objectives of FAO are all relevant to the work on crises and disasters as they relate to both short-

term relief and long-term risks and safety nets. FAO's objectives and activities relating to emergencies and resilience are also connected to the right to food and the human rights-based approach. In its contribution to work on the extreme food insecurity resulting from disasters in the Sahel region, for example, FAO promotes resilience and supports better governance of food security through defending the right to food. FAO further strives to promote the approach called "accountability to affected populations", which is defined as a people-centred approach that is sensitive to the dignity of all human beings, the varying needs of different segments within a community and the importance of ensuring that women, men, girls and boys can equally access and benefit from assistance. This work is based on seven FAO commitments that include ensuring transparency, providing grievance mechanisms, enabling participation and preventing sexual exploitation and abuse.

Disasters can cause or increase food insecurity and malnutrition. They tend to compromise particularly the qualitative aspect of the right to adequate food, which relates to nutritional standards. Putting comparatively more focus on making quantitatively sufficient food available in emergency responses may lead to ignoring nutritional issues, i.e. dietary quality and linkages to health and caring practices, which also need to be addressed. Disasters usually have disproportionate impact on vulnerable groups, which may include women, children, the aged and persons with disabilities whose nutritional status may be permanently impaired by even temporary disruptions in nutritional requirements. Existing socio-economic inequalities, which result in unequal access to power, resources and opportunities for different population groups, may also reflect in asymmetries in the provision of goods and services in emergency responses. This would go against the fundamental principles of non-discrimination and gender equality that underpin the right to adequate food and any other human rights.

While humanitarian actors have increasingly adopted the language of the HRBA in their policies and programmes, there have been challenges in the integrated application of human rights and humanitarian approaches in practice. Distinctions based on the characterization of human rights as long-term legal commitments that apply in peace time (through advocacy and political responsibility) and humanitarian protection as requiring immediate actions with neutrality (sometimes in the absence of a government to condemn) are proven to be largely artificial. The right to food is based on internationally agreed standards, the implementation of which does not necessarily require some form of blaming or taking sides. For instance, human rights can be used to start and maintain dialogue for peace, because parties to conflicts often portray an interest in the protection of rights. Human rights can also apply as programming principles to improve targeting, effectiveness and sustainability of emergency programmes based on processes that ensure participation, inclusiveness and accountability.

Moreover, the right to food is not only about long-term commitments of development, it also has aspects that require abstention or immediate actions. For example, it requires abstaining from destroying or contaminating food sources, avoiding causing further harm, identifying and providing for those in desperate need and ensuring non-discrimination in the provision of food and food-related aid.

PRIMERA PRUEBA FRANCÉS: TRADUCCIÓN

L'exil intérieur des jeunes de banlieue

A l'automne 2005, les banlieues françaises furent le théâtre d'émeutes urbaines. En dépit de cet électrochoc national, rien n'a vraiment changé dans les banlieues. Les jeunes « issus de l'immigration » y sont toujours « assignés à résidence », tels des « étrangers de l'intérieur ». Les jeunes de banlieue accumulent les mêmes contre-performances sociales : échecs scolaires, absence d'avenir professionnel, galères quotidiennes et recours aux combines de l'économie souterraine.

L'étiquette tenace de l'inutilité sociale et de la dangerosité leur colle à la peau. La discrimination négative les frappe durement. Etre discriminé négativement, c'est être assigné à un destin sur la base d'une caractéristique que l'on n'a pas choisie, mais que les autres vous renvoient sous la forme d'un stigmaté.

Leur problème majeur est celui de la reconnaissance. On refuse une citoyenneté effective à ces jeunes, pauvres, presque toujours d'origine étrangère et pourtant pour la majorité d'entre eux de nationalité française. Ces jeunes des quartiers ne sont pas totalement en dehors de la société (la cité n'est pas un ghetto) mais ils ne sont pas non plus dedans, puisqu'ils n'y occupent aucune place reconnue.

Leur situation est paradoxale : ils sont citoyens, inscrits dans le territoire français, et néanmoins ils subissent un traitement différentiel et discriminant qui les disqualifie.

La République, en contradiction avec ses propres principes, paraît incapable d'intégrer ces jeunes Français, comme s'il y avait toujours une marque, une trace d'une immigration lointaine qui pèse toujours sur eux. Pourtant, les immigrés

italiens ou polonais du début du siècle dernier se sont intégrés en une génération. Cela n'a pas toujours été facile, mais la République avait su faire son travail.

Les émeutes de novembre 2005 ont été une révolte du désespoir. Les émeutiers, qui n'étaient inspirés ou guidés ni par les gauchistes ni par les islamistes, avaient le sentiment de ne plus avoir de place ni d'avenir dans notre société. Il est bien sûr injustifiable de brûler des écoles, mais encore faut-il avoir l'honnêteté de reconnaître que l'école ne remplit pas dans ces quartiers le mandat d'égalité qui est le sien. L'échec scolaire entraîne l'échec professionnel. Les jeunes s'insurgent contre les discriminations dont ils sont victimes pour l'emploi ou le logement. C'est déjà un malheur d'être chômeur, mais pourquoi faut-il que s'y ajoute un sentiment d'injustice parce que, lors d'un entretien d'embauche, on a été éliminé sur la base de son nom ou de sa couleur de peau ? Le cumul des handicaps rend ainsi explosive la question ethnique et raciale.

Pourquoi y a-t-il aujourd'hui une telle stigmatisation de la religion musulmane alors que 5 millions de musulmans vivent en France ? Ce soupçon permanent d'islamisme radical dirigé contre cette communauté, dans un contexte de guerre au terrorisme, empoisonne l'atmosphère et sonne comme une condamnation collective.

Les enquêtes sociologiques montrent pourtant que plus de 80% des jeunes musulmans ont un rapport assez distant avec leur religion. Leur stigmatisation globale ne peut qu'accélérer le développement du communautarisme qui mettrait en danger l'unité de la nation. Actuellement, les banlieues ne sont pas encore des territoires ethniques, mais elles s'ethnicisent de plus en plus. Pourtant, on confond problèmes ethniques et problèmes avant tout sociaux.

D'où la tentation pour ces populations stigmatisées de retourner le stigmat, de s'affirmer arabe, noire ou musulmane, à défaut de pouvoir être reconnues comme membres à part entière de la nation française. Force est de constater qu'une dynamique de séparation est en train de s'installer et que se creuse progressivement une distance entre ces populations marquées par leur origine ethnique et le reste de la société française.

La France est devenue un pays pluriculturel et pluriethnique. Il le sera de plus en plus. Il faut apprendre à accepter cette réalité. Il est donc gravissime que la République ne soit plus capable d'intégrer des gens qui ont un héritage culturel différent.

PRIMERA PRUEBA FRANCÉS : RESUMEN EN FRANCÉS

De la guerre à la paix : une histoire européenne

La guerre est aussi ancienne que l'Europe. Notre continent porte les stigmates des lances et des fers, des canons et des fusils, des tranchées et des chars. Pourtant, après que deux guerres terribles se sont abattues sur le continent et sur le reste du monde, la paix s'est installée en Europe.

Pendant la sombre période de l'après-guerre, le deuil et le ressentiment emplissaient encore les cœurs. Dès lors, quel pari audacieux, que celui des pères fondateurs de l'Europe, qui ont affirmé : oui, nous pouvons briser ce cycle sans fin de la violence, nous pouvons mettre un terme à la logique de vengeance et construire un avenir meilleur, ensemble.

Bien sûr, la paix aurait peut-être pu s'installer en Europe sans l'Union. Mais cela n'est pas certain. En tout état de cause, elle n'aurait jamais pu être de cette qualité. Une paix durable et non un froid cessez-le-feu.

La réconciliation est ce qui rend cette paix si particulière. Elle va au-delà du pardon et de l'oubli, ou du fait de simplement tourner la page. Adenauer et De Gaulle dans la cathédrale de Reims : c'est là l'une des images émouvantes qui ont aidé l'Europe de l'après-guerre à cicatriser ses plaies. D'autres images encore viennent à l'esprit : les dirigeants de six États rassemblés à Rome pour ouvrir la voie à un nouvel avenir ; Willy Brandt s'agenouillant à Varsovie ; les dockers de Gdansk rassemblés pour manifester ; Mitterrand et Kohl se donnant la main ; et Rostropovitch jouant Bach au pied du mur de Berlin détruit.

Cependant, les gestes symboliques ne suffisent pas à garantir une paix durable. C'est là qu'intervient l'« arme secrète » de l'Union européenne : cette manière incomparable de lier nos intérêts si étroitement - par des négociations constantes, sur un nombre toujours plus grand de sujets et entre des pays toujours plus nombreux - que la guerre en devient matériellement impossible.

Il est vrai que certains aspects peuvent être déconcertants : des ministres de pays sans littoral débattant ardemment des quotas de pêche ou des députés européens de Scandinavie discutant le prix de l'huile d'olive. L'Union a su parfaire l'art du compromis. Il n'est pas question de victoire ou de défaite, mais il s'agit de faire en sorte que tous les pays sortent gagnants des négociations.

Cela a fonctionné. Aujourd'hui, la paix va de soi. La guerre est impensable. Pourtant, « impensable » ne signifie pas « impossible ». C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis ici à Oslo. L'Europe doit tenir sa promesse de paix, mais elle ne peut plus compter sur cette seule promesse pour rallier ses citoyens.

Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, alors que la pire crise que l'on ait connue en deux générations frappe nos économies, causant de grandes difficultés à nos concitoyens, et mettant à l'épreuve les liens politiques de notre Union.

Ces parents qui ont du mal à joindre les deux bouts, ces travailleurs qu'on vient de licencier, ces étudiants qui redoutent de ne pas décrocher ce premier emploi malgré tous leurs efforts : lorsqu'ils pensent à l'Europe, la paix n'est sans doute pas la première chose qui leur vient à l'esprit...

Nous déployons des efforts considérables pour surmonter les difficultés, pour relancer la croissance et l'emploi. Nous sommes confiants dans le fait que nous réussirons.

L'Union européenne, ce n'est pas que la paix entre les nations. En tant que projet politique, elle incarne – pour reprendre la définition de la paix de Spinoza – «un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice».

La quête de liberté et de démocratie a rendu possible la réunification du continent. L'Union européenne est devenue notre maison commune. «La patrie de nos patries» comme l'a appelée Vaclav Havel.

Les pères fondateurs ont compris que pour garantir la paix au 20^e siècle, les nations devaient aller au-delà de la notion d'État nation. Ce que le projet européen a d'unique, c'est d'avoir concilié la légitimité d'États démocratiques et la légitimité d'institutions supranationales qui protègent l'intérêt général européen.

Notre quête d'unité européenne n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre des finalités supérieures. Elle atteste la quête d'un ordre cosmopolitique. Malgré ses imperfections, l'Union européenne est une puissante source d'inspiration pour tant d'autres à travers le monde. Au delà de notre nation, au-delà de notre continent, nous faisons tous partie d'une même Humanité.

En tant que continent qui, après avoir été dévasté, est devenu l'une des économies les plus puissantes au monde, nous avons une responsabilité particulière à l'égard de millions de personnes dans le besoin. En tant que communauté de nations ayant combattu le totalitarisme, nous nous tiendrons toujours aux côtés de ceux qui aspirent à la paix et à la justice, à la démocratie et à la dignité humaine. Nos pensées vont aux défenseurs des droits de l'homme qui, dans le monde entier, risquent leur vie pour défendre les valeurs qui nous sont chères.

Notre continent, qui s'est relevé de ses cendres après 1945 et s'est unifié en 1989, possède une extraordinaire capacité à se réinventer. Il appartient ainsi aux générations futures de poursuivre cette aventure commune.

SEGUNDA PRUEBA ALEMÁN : TRADUCCIÓN

Abschalten!

Arbeitsministerin Nahles erwägt eine Anti-Stress-Verordnung, um Arbeitnehmer vor E-Mails ihrer Chefs nach Feierabend zu beschützen. Aber Jobstress lässt sich nicht verbieten. Wer Freizeit will, braucht Disziplin.

Es ist erstaunlich, wie oft Politiker unfreiwillig in Konkurrenz zu Kabarettisten treten. Schon der oft zitierte Koalitionsvertrag mit den schönen Plänen der großen Koalition versprach Wunderliches: Das Regierungsbündnis werde dafür sorgen, dass der Tourismus in Deutschland "ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis" bekomme. Auch solle "die Qualität der pädagogischen Ausbildung der Fahrlehrer" erhöht werden. Jetzt denkt die Arbeitsministerin über etwas nach, was einen Kabarett-Preis verdient hätte. Andrea Nahles erwägt eine Anti-Stress-Verordnung, um Arbeitnehmer vor E-Mails ihrer Chefs nach Feierabend und am Wochenende zu beschützen.

Sie wird es nicht schaffen, den Jobstress per Verordnung zu verbieten und aus der Welt zu schaffen. Deshalb ist ihr Vorhaben auch überflüssig wie ein Gesetz zur Hebung der Volkszufriedenheit. Der Druck der Menschen am Arbeitsplatz ist ein zu ernstes Problem, um mit Polit-Mätzchen dagegen anzutreten.

Aber die SPD hat ein Thema entdeckt. Die Anzahl der psychischen Erkrankungen nehme zu, weil Arbeitnehmer pausenlos erreichbar sein sollen, sagt Nahles. Dazu habe sie wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel fordert "ein Recht auf Feierabend". [...] Auch die Gewerkschaften drängen auf ein Anti-Stress-Gesetz. Dabei sah es so aus, als sei die Sommerflaute vorbei, als gebe es wichtigere Themen als die E-Mail-Pest von Vorgesetzten. Doch offenbar ist diese unerfreuliche Begleiterscheinung des digitalen Zeitalters wichtiger als

Waffenlieferungen für die Kurden, Krieg am Ostrand der EU oder Sanktionen gegen Russland. Glücklicherweise das Land, das solche Sorgen hat.

Ein Problem ist jedoch die Belastung der Menschen am Arbeitsplatz. Die Ansprüche an die Arbeitnehmer steigen, Ärzte und Krankenkassen beklagen die gesundheitlichen Folgen der wachsenden Dauerbelastung, die auch eine Folge wirtschaftlicher Konkurrenz im globalen Umfeld ist. Die Menschen steigern ihren Lebensstandard durch wachsendes Einkommen und bezahlen mit höherer Belastung im Job als Folge ständiger Produktivitätssteigerungen. Viele zahlen diesen Preis für den Erfolg der Industrie im globalisierten Markt aber auch mit dem Verlust des Arbeitsplatzes oder dadurch, dass sie nur noch prekäre Arbeitsverhältnisse, Mini-jobs oder Zeitverträge bekommen. Es gäbe viel zu tun für eine Arbeitsministerin.

Die Anzahl der Telefonanrufe, die lange Liste der E-Mails am Wochenende mag zum Problem geworden sein. Die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit sind in vielen Betrieben und Branchen verschwommen. Das verleitet manchen Vorgesetzten dazu, seine Mitarbeiter mit Nachrichten und Anweisungen zu traktieren. Aber richtig ist auch, dass Übergriffe auf die Freizeit der Mitarbeiter schon jetzt nicht erlaubt sind. Kaum ein Bereich der Wirtschaft ist so strikt geregelt wie der Arbeitsmarkt.

Das Arbeitszeitgesetz legt die maximalen Arbeitsstunden am Tag und in der Woche fest. Die Arbeitsruhe am Wochenende ist geregelt, und es gibt Schutzvorschriften für Nachtarbeit. Betriebsräte können eingreifen, wenn in einem Unternehmen die Chefs ihre Mitarbeiter sinnlos malträtieren. Längst haben viele Unternehmen selbst erkannt, dass es sinnvoll ist, die Mitarbeiter nach Büroschluss in Ruhe zu lassen.

Welt und Arbeitswelt haben sich verändert. In einem Beruf mag die Belastung durch E-Mails nach Feierabend ärgerlich sein. Im anderen sind nächtliche Nachrichten am Laptop für den Mitarbeiter Ausdruck neuer Freiheit, die es erlaubt, Arbeiten nach Hause zu verlegen. Das Verfließen von Arbeitszeit und Freizeit ist eine Zeiterscheinung, die nicht jedem missfällt. Deswegen wirkt das Beharren von SPD und Gewerkschaften auf klar definierten Linien zwischen Privat- und Arbeitsleben heute merkwürdig weltfremd.

Die Veränderung der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter darf deshalb aber nicht zu einer Anarchie führen, welche die Rechte der Arbeitnehmer aus den Angeln hebt.

Dass die Grenzen zwischen Job und Arbeit verschwimmen, verlangt vom Arbeitnehmer allerdings erhöhte Disziplin. Wo das Firmenhandy oder der Bürolaptop den Eindruck erwecken, auch zu Hause ständig im Dienst zu sein, gilt noch immer das schon jetzt bestehende Recht auf Feierabend. Man kann auch abschalten. Man muss es tun. Das ist rechtlich in Ordnung, und eine glückenhafte Ministerin Nahles, die ihre Mitmenschen vor bösen Chefs retten will, wird für diese Lösung nicht gebraucht.

SEGUNDA PRUEBA ALEMÁN : RESUMEN EN ALEMÁN

Besser essen

Ob Ökocarotten oder Naturnüsse: Lebensmittel in Bio-Qualität stehen hoch im Kurs. Sie sollen gesünder sein und besser schmecken. Doch stimmt das auch?

Bio hat längst sein muffiges Müsli-Image verloren: Fast jeder Supermarkt hat inzwischen seine Bio-Abteilung, in den Großstädten eröffnen immer mehr schicke Shops, die ausschließlich Ökonahrung anbieten. Doch sind Biomöhren tatsächlich besser als die ordinären Karotten im Plastikbeutel? Und schmeckt das Schnitzel vom Öko-Schwein wirklich besser?

Die Antworten liefert ein Blick auf die Produktions-Methoden der Biobauern. Konventionell arbeitende Landwirte bestellen ihre Äcker meist einseitig: Sie säen und ernten nur eine bestimmte Pflanze. Dadurch laugt die Erde aus, natürliche Nährstoffe gehen verloren. Deshalb tränken die Bauern ihre Felder mit Kunstdünger. Um die Saat zu schützen, spritzen sie Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel. Die Rückstände dieser Gifte essen wir dann mit.

Biobauern dagegen halten nichts von Pestiziden und Kunstdüngern auf dem Acker. Sie düngen mit Tiermist und bauen immer wieder unterschiedliche Pflanzen an. Weil dem Boden nicht einseitig Nährstoffe entzogen werden, erholt er sich und bleibt auf natürliche Weise fruchtbar. Diese Anbauweise wirkt sich auf die Qualität von Obst und Gemüse aus.

Auch bei der Fleischproduktion gehen Biobauern andere Wege: Statt Hühner, Schweine und Rinder in riesigen Ställen und in drangvoller Enge zu halten, ermöglichen sie ihren Tieren Auslauf in der freien Natur. Jungtiere dürfen in der Nähe ihrer Mutter bleiben. Die Bauern mästen ihre Tiere nicht, sondern füttern sie hauptsächlich mit biologisch angebautem Futter, mit Gras und Heu. Sie verzichten auf chemische oder synthetische Futterzusätze und Hormonspritzen.

Auf Bio-Höfen dürfen nur so viele Tiere leben, wie das Land ernähren kann und wie der Boden an Gülle verkräftet. Kaufen Sie ein Bio-Würstchen, können Sie

nahezu sicher sein, dass das Schwein oder Huhn, das darin verwurstet ist, unter guten Bedingungen gelebt hat.

Dabei müssen Sie allerdings genau auf den Aufdruck achten: Nur die Bezeichnungen "biologisch" oder "bio", "ökologisch" oder "öko" geben Sicherheit. Diese Bezeichnungen sind gesetzlich geschützt und gewährleisten, dass ein Produkt zu 95 Prozent nach den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung erzeugt wurde. In dieser Verordnung ist aufgelistet, welche Zutaten, Zusatzstoffe und Hilfsstoffe Bioprodukte enthalten dürfen.

Verlassen können Sie sich aber auch auf die Bezeichnung "kontrolliert biologisch" - auch wenn das doppelt gemoppelt ist: Bio-Produkte werden immer kontrolliert. Einige Bio-Verbände, wie etwa Demeter, haben sich sogar besonders strenge Standards gesetzt und werben dafür mit ihrem Bio-Siegel. Daneben gibt es eine Reihe von Bezeichnungen, die zwar nach Bio klingen, es aber nicht sind: Etwa: "kontrollierter Anbau", "alternativ", oder "natürliche Herstellung". Diese Formulierungen wollen Sie nur in die Irre führen.

Irreführend ist auch die Devise: Nur Bio-Ernährung ist eine gesunde Ernährung. Das stimmt dann nicht, wenn Sie sich nicht ausgewogen ernähren. Denn auch drei Kilo Bioschokolade am Tag sind ungesund. Stattdessen gilt: Zunächst sollten Sie darauf achten, sich ausgewogen zu ernähren, erst dann sollten Sie entscheiden, ob Sie Lebensmittel mit Rückständen von Chemikalien wollen oder nicht.

Laut des staatlichen Bundesinstituts für Risikobewertung sind Pestizid-Rückstände für uns zwar ungefährlich, weil sie meistens nur in geringen Mengen vorkommen. Häufig werden aber Grenzwerte überschritten. Und immer mal wieder werden - aus gutem Grund - bestimmte Pflanzenschutzmittel verboten. Und wie sich Pestizide langfristig auf unsere Gesundheit auswirken, ist immer noch nicht hinreichend erforscht.

Nicht eindeutig nachgewiesen ist, ob Bio-Lebensmittel tatsächlich mehr Vitamine oder andere Nährstoffe enthalten als vergleichbare herkömmliche Produkte. Studien haben dies bisher nur im Einzelfall belegt. Das Problem besteht in der Vergleichbarkeit. Und doch bekommen Sie bei Bio oft mehr für Ihr Geld: Weil

Biobauern ihren Pflanzen fast immer mehr Zeit zum Reifen lassen. Bio-Gemüse und Bio-Obst enthalten dadurch weniger Wasser, schmecken intensiver und haben im Allgemeinen ein bisschen mehr an sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen und Vitaminen. Auch Bio-Milch ist gesünder, weil sie in der Regel mehr Omega-3-Fettsäuren enthält.

Gesünder heißt aber auch - teurer. Der höhere Preis für Bioprodukte hat folgende Ursachen:

- Öko-Bauern haben mehr Arbeit: Sie führen die Tiere auf die Weide und misten den Stall aus.
- Ergänzungsfutter, Saatgut, natürliche Pflanzenschutzmittel und Zuchttiere in Bioqualität kosten mehr.
- Bio-Tiere bekommen altersgemäßes Futter - jedem Entwicklungsstadium angepasst.
- Die Tiere leben länger. Und sie ergeben weniger Fleisch, erzeugen weniger Milch oder Eier.
- Bioprodukte sind meist keine Massenware und werden in kleineren Mengen verarbeitet. Sie müssen strenger von anderen Lebensmitteln getrennt werden.
- Hilfsstoffe wie künstliche oder naturidentische Aromen sind verboten: Darum müssen die Hersteller einem Bio-Fruchtjoghurt zum Beispiel mehr Früchte beimischen.
- Bio-Bauern müssen für die regelmäßigen strengen Kontrollen Gebühren bezahlen.

Bio tut Ihnen gut - und der Umwelt. Biobauern verwenden keinen Kunstdünger, der Nitrat enthält, und belasten daher das Grundwasser nicht mit dem Stoff. Weil sie Kunstdünger und chemische Pflanzenschutzmittel nur sehr begrenzt einsetzen, haben ihre Produkte eine positivere Ökobilanz. Denn Dünger und Pestizide werden mit viel Energieaufwand hergestellt.

Abzuraten ist, energiepolitisch betrachtet, von Bio-Exoten aus dem Ausland: Sie werden meist mit dem Flugzeug nach Deutschland transportiert. Essen Sie daher am besten heimisches Gemüse und Obst der Saison.

SEGUNDA PRUEBA INGLÉS : TRADUCCIÓN

Leveraging Anti-Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in Human Beings

Trafficking in human beings (THB) poses a grave transnational threat to countries within the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) region and beyond. THB and the investment of its proceeds are known to challenge economic security, feed corruption, and undermine the rule of law in countries where THB occurs and where its proceeds are collected and integrated into both the formal and criminal economies.

THB businesses are generally characterized by low start-up costs, high profitability and a high degree of cross-border movement of persons and funds. New data released by the International Labour Organization (ILO) in May 2014 estimates that forced labour in the private economy including for sexual exploitation generates USD 150 billion per year in illegal proceeds. Taken together with the increasing ability of traffickers to move proceeds quickly across borders and the fact that successful national and international criminal justice responses to the crime remain rare, THB is a low-risk, high-reward crime that affects nearly 21 million victims worldwide.

To date, most of the global effort to stem THB has focused on the THB crime itself, and not on the proceeds derived from and invested in THB. This trend is due to several factors. Too often, the anti-trafficking and anti-money laundering communities work in isolation from one another. Law enforcement agencies are often unaware of or unequipped to handle THB-related financial activity, whereas financial investigators generally lack knowledge of THB operations. Interagency and international co-operation on THB is frequently weak and is particularly limited with respect to THB-related financial investigations. National legislation on THB is

often insufficient and no country has been rated as “compliant” with all recommendations on combating money laundering (ML).

Transforming THB into a high-risk, low-reward criminal activity requires comprehensive solutions to the abovementioned challenges. One of the most effective ways to disrupt and dismantle THB criminal networks is to identify and confiscate the money they spend and collect. Because some criminals are willing to risk serving time in prison if they are confident that the money from their criminal activities will be available to them upon release, the confiscation of criminal profit has a clear potential to dissuade the highest levels of a criminal enterprise. In addition, tracing the financial flows associated with THB often allows investigators to identify additional members and victims of a THB organization, and confiscated funds and assets can be used to support both law enforcement and victim support programmes.

Doing so more effectively however, requires first and foremost that funds be made available and secondly that legal practitioners including both judges and victim representatives are trained to make full use of victim compensation provisions in national legislation.

Anti money laundering (AML) regimes, which seek in part to identify and confiscate the proceeds of crime, can support countries’ efforts to identify and confiscate the proceeds and instrumentalities of THB. Operational in almost every jurisdiction around the world, AML regimes provide their jurisdictions with useful tools for detection, investigation, co-operation and confiscation. AML regimes, however, are most effective when they enjoy close co-operation with their national and international counterparts in law enforcement and the broader anti-trafficking community.

Although AML regimes offer tools that are useful in identifying and analysing financial flows related to THB, important AML stakeholders, including government officials and private sector reporting entities, may not have detailed knowledge of THB business models, markets and preferences for moving illicit funds. This knowledge gap can be addressed in part by providing AML experts with red-flag indicators of possible THB-related financial activity that other countries and financial institutions have identified in the course of their own THB investigations.

All stakeholders would thus derive benefit from making full use of available research and best practices and to continue building capacity in their respective jurisdictions and organizations to more effectively combat THB.

SEGUNDA PRUEBA INGLÉS: RESUMEN EN INGLÉS

European Water Scarcity and Droughts Policy

Over the past decade, the concerns about drought events and water scarcity have grown within the EU, especially with regard to long-term imbalances of water demand and water availability in Europe.

Following one of the most widespread droughts in 2003 affecting over 100 million people, a third of the EU territory, with a cost of at least € 8.7 billion, the EU Council of Ministers asked the European Commission to address the challenges of water scarcity and droughts in the EU.

The Commission responded to this call in the Communication on water scarcity & droughts in the European Union, which laid down a water hierarchy under which water demand management should come first, and alternative supply options only once the potential for water efficiency has been exhausted. The Communication identified several policy options to address these challenges.

The Commission has assessed progress in implementing these policy options in annual follow-up reports. This report responds to the 2007 Council request to review by 2012 whether the policy on water scarcity and droughts has achieved its objectives of reducing water scarcity and vulnerability to droughts. This assessment is based on a number of studies launched by the European Commission and on the assessment of the Member States river basin management plans.

Water scarcity and Droughts in Europe

In 2011 and 2012 droughts affected large parts of Southern, Western and even Northern Europe. The 2011 drought has been referred to as the worst in a century with rainfall as low as 40 percent of normal. In both years water availability was significantly reduced in the spring and water use restrictions were put in place in large parts of the EU. Over the past thirty years, droughts have dramatically increased in number and impact. Between 1976 and 2006 the number of areas and people affected by droughts went up by almost 20% and the total costs of droughts amounted to 100 billion €.

In 2007 at least 11% of the EU population and 17% of its territory had experienced water scarcity and the phenomena is getting worse; currently an important share of river basins can be considered as under water stress all year round. During summer months water scarcity is more pronounced in Southern Europe but is also becoming increasingly important in Northern basins, including UK and Germany.

Both droughts and water scarcity can cause economic losses in key water-using sectors and environmental impacts on biodiversity, water quality, deterioration and loss of wetlands, soil erosion, land degradation and desertification. Some of the effects are short-term and conditions quickly return to normal whilst other effects may become permanent.

Water Scarcity and Droughts Policy in Europe

The policy instruments identified in the 2007 Communication are both important tools to revert the trends of water scarcity and the vulnerability to droughts in the EU. These tools include the following:

1. Putting the right price tag on water and authorization procedures

In agriculture, the biggest consumptive sector for water in the EU, operational costs for the provision of water are only partly recovered for 10 Member States and capital costs are often subsidized. An important share of water abstractions for agriculture in the EU is not priced, even in water stressed areas, and there is no financial mechanism for recovering the environmental and resource costs of individual abstractions or for giving incentives to using water more efficiently.

Authorization procedures for water abstraction or use are generally in place in all Member States, but procedures differ significantly and illegal abstractions remain an important challenge in parts of Europe. The practice to restrict water use in times of water scarcity or drought is included in many Member States' water allocation policies.

In Europe, Spain is the only country where, since 1999, trading water use rights has been possible and since 2005, water markets emerged with a diversity of informal and formal trading mechanisms. During the 2005-2008 drought in Spain, water market exchanges alleviated the conditions of those basins where water scarcity was most severe.

2. Considering additional water supply infrastructures

In some Member States, additional water supply infrastructures have been developed before exploiting the full potential of water saving measures. The potential environmental impacts of new water supply infrastructure plans have not been systematically considered by Member States.

The development or upgrade of desalinization plants is of high importance for River Basins in Southern Europe. Adverse environmental effects of desalination are not always sufficiently considered in the plans.

3. Fostering the emergence of a water-saving culture in Europe

Member States are implementing a broad spectrum of awareness raising activities to foster water saving, but other tools such as incentive pricing, financing mechanisms for water saving eco-design for water using appliances etc are not always sufficiently present.

Conclusion

The overall objective of the policy - to revert the water scarcity trends - has not been achieved, even if progress has taken place in implementing the policy instruments identified in the Commissions Communication.

The majority of measures applied by Member States target pressures, state and impacts and only very few measures target key drivers.

SEGUNDA PRUEBA FRANCÉS: TRADUCCIÓN

Qu'est-ce que le développement durable ?

Le 20 juillet 1969, l'homme se pose sur la lune et prend conscience que la planète bleue est une minuscule oasis fragile, perdu dans l'immensité de l'univers. À l'époque, seulement 3,5 milliards d'être humains vivaient sur la Terre. Aujourd'hui, nous sommes 6,2 milliards, soit une augmentation de 79% en seulement 33 ans.

Et si l'on en croit les données démographiques, il y a de fortes chances pour que la Terre soit peuplée de 10 milliards d'êtres humains avant le milieu du siècle. Autrement dit, quatre milliards de bouches supplémentaires à nourrir, dont la plupart se trouveront sans doute dans les mégalofoles du Tiers-Monde. Quatre milliards d'hommes qu'il faudra loger, chauffer, éclairer alors que 800 millions de personnes souffrent toujours de faim à l'heure actuelle, qu'un milliard et demi n'ont pas accès à l'eau potable et que deux milliards ne sont pas raccordés aux réseaux d'électricité. Or, en 2050, si chaque habitant des pays en développement consomme autant d'énergie qu'un Japonais en 1973, la consommation mondiale d'énergie sera multipliée par quatre.

Certes, en l'espace de seulement un demi-siècle, le niveau de vie d'une partie de l'humanité a plus évolué que pendant deux millénaires. Mais en contrepartie, les catastrophes industrielles n'ont cessé de se multiplier : Tchernobyl, Seveso, Bhopal, Exxon Valdez pour ne citer que les plus graves. Sans oublier les dégâts écologiques inquiétants : pollution de l'air et de l'eau, disparitions d'espèces animales et végétales, déforestation massive, désertification, trou de la couche d'ozone, effet de serre,...

D'où ces questions fondamentales : Comment concilier progrès économique et social sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète ? Comment répartir les

richesses entre les pays riches et ceux moins développés ? Comment donner un minimum de richesses à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants encore démunis à l'heure où la planète semble déjà asphyxiée par le prélèvement effréné de ses ressources naturelles ? Et surtout, comment faire en sorte de léguer une terre en bonne santé à nos enfants ?

C'est pour apporter des réponses concrètes à ces questions qu'est né le concept de développement durable. Un concept que l'on résume aujourd'hui d'une simple phrase : « un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

En juin 1992, de nombreux États se sont rencontrés à Rio pour aborder cette question du développement durable, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement – connue sous le nom de « Sommet Planète Terre » -. Suite à ce sommet, ces États se sont engagés à élaborer une stratégie nationale de développement durable, dont la mise en œuvre est complexe car le développement durable impose des changements structurels en profondeur.

Le chemin est long pour parvenir au développement durable. Il faut une implication de tous les groupes socio-économiques. Tous les acteurs de la société doivent agir en commun. Les entreprises, les pouvoirs publics, les associations, les ONG, les syndicats, les citoyens, tous doivent travailler main dans la main afin de réconcilier des mondes qui se sont longtemps ignorés : l'économie, l'écologie et le social. Il faut aussi rééquilibrer les forces économiques entre les pays du Sud et du Nord. Les pays en voie de développement sont trop endettés et freinés dans leurs échanges commerciaux pour consacrer l'énergie et les moyens suffisants à l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Il faut annuler la dette

extérieure publique du Tiers-Monde et appliquer une taxe de type Tobin en affectant les recettes à des projets de développement durable.

Et surtout, il convient de ne pas oublier qu'il n'y aura pas de développement possible s'il n'est pas économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable.

SEGUNDA PRUEBA FRANCÉS: RESUMEN EN FRANCÉS

L'ONU révèle d'importantes lacunes en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, surtout dans les zones rurales

D'après un nouveau rapport publié par l'Organisation mondiale de la Santé au nom d'ONU-Eau, les efforts mondiaux pour améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement pour tous prennent de l'ampleur mais d'importantes lacunes dans le financement continuent de freiner les progrès.

Cet ouvrage de référence, qui contient une analyse et une évaluation sur l'assainissement et l'eau potable à l'échelle mondiale, est publié par ONU-Eau tous les deux ans.

Le dernier rapport présente des données en provenance de 94 pays. Il propose une analyse exhaustive, par pays, des points forts et des difficultés en matière d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène.

L'aide internationale en faveur de l'eau et de l'assainissement est en augmentation : selon le rapport, les engagements financiers en faveur de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène ont augmenté de 30% entre 2010 et 2012 – passant de 8,3 milliards de dollars à 10,9 milliards.

L'aide est de plus en plus dirigée sur les régions mal desservies, notamment l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Le rapport met également en lumière l'augmentation des ressources en faveur des plus pauvres : plus de 75% des pays ont déclaré avoir mis en place des mesures spécifiques dans leurs plans nationaux pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en faveur des populations à faible revenu.

Malgré ces progrès, près d'un milliard de personnes continuent de pratiquer la défécation à l'air libre; 748 millions d'autres n'ont pas facilement accès à une source améliorée d'eau potable. Et des centaines de millions de personnes n'ont ni eau propre ni savon pour se laver les mains, ce qui favorise la propagation de maladies diarrhéiques, deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Beaucoup d'autres maladies à transmission hydrique comme le choléra, la typhoïde et l'hépatite peuvent donner lieu à des flambées explosives. Un assainissement et une hygiène médiocres peuvent également entraîner des maladies débilitantes qui touchent un grand nombre de personnes dans les pays en développement.

Le rapport cite un certain nombre de difficultés majeures. Les 5 difficultés majeures sont les suivantes :

Un financement insuffisant

Même si l'aide internationale en faveur du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a augmenté, les besoins financiers au niveau national restent supérieurs aux ressources disponibles. 80% des pays ont déclaré que les niveaux actuels de financement étaient insuffisants pour atteindre les objectifs en matière d'eau potable et d'assainissement.

Un déficit de financement dans les zones rurales

Si la grande majorité des personnes dépourvues d'accès à l'assainissement de base vivent en milieu rural, l'essentiel du financement continue de bénéficier aux habitants des villes. Les dépenses pour l'assainissement en milieu rural représentent moins de 10% du total de financement du secteur.

Faible capacité nationale à exécuter les plans du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène

Malgré un appui politique important en faveur de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, moins d'un tiers des pays enquêtés pour le rapport sont dotés de plans nationaux pour le secteur.

Des lacunes essentielles en matière de suivi

Disposer de données fiables est un facteur essentiel pour repérer les lacunes dans l'accès aux services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène et pouvoir ainsi orienter les décisions politiques. Même si de nombreux pays ont élaboré des cadres de suivi du secteur, une majorité font état d'une collecte de données irrégulière ou fragmentaire et de faibles capacités d'analyse.

Les services négligés dans les écoles et les établissements de santé

Dans les écoles, les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement peuvent faire en sorte que les enfants restent scolarisés et acquièrent des habitudes d'hygiène qu'ils garderont toute leur vie. Dans les centres de santé, ces services permettent de garantir l'intimité et la sécurité des patients, en particulier celles des mères pendant l'accouchement, et sont essentiels pour prévenir des flambées de maladies et lutter contre celles-ci. Or moins de 30% des pays enquêtés sont dotés de plans nationaux d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène en milieu institutionnel.

Or les investissements dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement produisent des bénéfices substantiels pour la santé et le développement humains. Selon les estimations de l'OMS, pour chaque dollar investi, le retour est de 4,3 dollars sous forme de réduction des dépenses de santé, aussi bien au plan individuel qu'au niveau de la société dans son ensemble. Des millions d'enfants

peuvent être sauvés d'un décès prématuré ou de maladies à transmission hydrique. Les adultes peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Ces avantages touchent à de nombreux secteurs. Les gains économiques et environnementaux se traduisent par exemple par une productivité accrue sur le lieu de travail et une baisse de la pollution de l'eau et des sols. Les gains de qualité de vie se traduisent par une fréquentation scolaire accrue, une plus grande sécurité – surtout pour les femmes, les enfants et les personnes âgées - et une dignité accrue pour tous.

ANEXO 3

CUARTO EJERCICIO

CUARTO EJERCICIO

XLIX PRUEBAS SELECTIVAS
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO
GRUPO DE MATERIAS ECONÓMICAS

A efectos del presente supuesto de examen, se asumirá que la regulación vigente y los datos son los que figuran a continuación.

PARTE A

El transporte por carretera es uno de los sectores clave para el desarrollo del mercado interior y el desarrollo económico de un Estado.

En el país Borduria, miembro de la Unión Europea, se definen los siguientes conceptos en relación con el sector del transporte por carretera:

- Vehículo ligero: vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías con una capacidad de carga útil no superior a 3,5 toneladas.
- Vehículo pesado: Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías, cuya capacidad de carga exceda de 3,5 toneladas.

Además, los transportes por carretera se clasifican, según su naturaleza, en públicos y privados.

Se definen como transportes públicos aquéllos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica.

Por su parte, se consideran transportes privados aquéllos que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para satisfacer necesidades particulares, bien como complemento de otras actividades principales realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas actividades.

La **regulación** del sector del transporte por carretera en el país Borduria está conformada por un Reglamento de la Unión Europea y una ley nacional con su reglamento de desarrollo.

El Reglamento de la Unión Europea establece en términos generales, y entre otras cuestiones, las condiciones de acceso a la actividad de prestación de servicios de transporte por carretera.

Dichas normas determinan el régimen de autorización para el acceso y ejercicio a la actividad de transportista por carretera, tal y como sigue:

“Artículo E: Requisitos para ejercer la profesión de transportista por carretera

1. Las empresas que ejercen la profesión de transportista por carretera deberán:

a. tener un establecimiento efectivo y fijo en un Estado miembro;

b. gozar de honorabilidad;

- c. poseer la capacidad financiera apropiada, y*
- d. tener la competencia profesional requerida.*

2. Los Estados miembros podrán decidir imponer requisitos adicionales, los cuales serán proporcionados y no discriminatorios, que las empresas deberán cumplir para ejercer la profesión de transportista por carretera.”

Adicionalmente, esta normativa europea permite a los Estados Miembros, entre otras cuestiones, eximir de los requisitos anteriores a los operadores de este mercado que realicen exclusivamente transportes nacionales por carretera que tengan una escasa influencia en el mercado de los transportes, en razón de la naturaleza de la mercancía transportada, o las cortas distancias recorridas.

Asimismo, también dispone la inaplicación de los requisitos, salvo que el Derecho interno disponga otra cosa: a los operadores que usen vehículos de motor cuya capacidad total de carga autorizada no supere las 3,5 toneladas; a los que presten servicios de transporte de viajeros por carretera exclusivamente con fines no comerciales y a los que operen únicamente mediante vehículos de motor cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 km/h.

Este régimen de autorizaciones para el acceso y ejercicio de la profesión de transportista por carretera al que hace referencia la normativa de la Unión Europea queda recogido en el marco normativo nacional, del siguiente modo para el caso de los transportes de carácter público (Los transportes de carácter privado no precisan de autorización).

En la Ley nacional del país Borduria se establecen las condiciones previas para el ejercicio profesional del transporte por carretera del siguiente modo:

Artículo L:

1. La realización de transporte público de mercancías estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente

Las autorizaciones de transporte público deberán domiciliarse únicamente en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal.

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, no será necesaria la previa obtención de autorización para realizar las siguientes modalidades de transporte

a) Transporte de viajeros o mercancías realizado en vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 40 kilómetros por hora.

b) Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de sondeo, etc.

c) Transporte público de mercancías realizado en vehículos ligeros de hasta 2 toneladas de capacidad de carga.

Artículo L+1.

1. *El otorgamiento de la autorización de transporte público, para aquellas empresas que conforme al artículo anterior lo precisen, estará condicionado a que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:*

a) *Tener nacionalidad del país Borduria*

b) *Cuando no se trate de una persona física, tener personalidad jurídica propia e independiente de la de aquellas personas que, en su caso, la integren.*

En ningún caso se otorgarán autorizaciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público debe ser el único objeto social de la empresa, indicado de forma expresa en su escritura de constitución.

c) *Contar con un domicilio situado en el país Borduria en el que se conserven, a disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, los documentos relativos a su gestión y funcionamiento que reglamentariamente se determinen.*

d) *Disponer de uno o más vehículos matriculados en el país Borduria conforme a lo que en cada caso resulte exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.*

e) *Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la legislación vigente.*

g) *Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se establezcan, atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación, en relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso.*

2. *Además de las condiciones señaladas en el punto anterior, cuando la autorización habilite para la realización de transporte público de mercancías en vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas, deberán cumplir los requisitos de establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y competencia profesional exigidos por la reglamentación de la Unión Europea.”*

Estos requisitos encuentran su desarrollo en la normativa reglamentaria nacional tal y como sigue:

“Artículo R. Requisitos para la obtención de la autorización de transporte público.

1. Quien pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva deberá acreditar, junto con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa comunitaria en los casos que sea de aplicación, que dispone, al menos, de los siguientes vehículos:

a) Disponer, a partir de 2008 de un número igual o superior a tres vehículos, que representen al menos una capacidad de carga útil de 60 toneladas, para el caso de los vehículos pesados.

b) Un vehículo, si se solicita una autorización que exclusivamente habilite para realizar transporte con vehículos ligeros.

Tales vehículos no podrán rebasar la antigüedad máxima de un mes, contado desde su primera matriculación, en el momento de formularse la solicitud

2. Cuando el solicitante de la nueva autorización sea una persona física deberá acreditar, además, que cuenta con el oportuno certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transporte de mercancías, expedido a su nombre. Asimismo, tanto para el caso de personas físicas como jurídicas, la organización de la entidad que lo solicite deberá necesariamente incluir en la plantilla, al menos una persona encargada de la administración de la entidad y como mínimo 5 conductores debidamente cualificados. Este requisito será de aplicación tanto para transportes ligeros como pesados que precisen de la citada autorización.

3. En ningún caso se otorgará una nueva autorización cuando el interesado sea titular de otra autorización de transporte de **mercancías** cuya validez se encuentre, por cualquier causa, suspendida.

4. Para el cumplimiento del requisito de capacidad financiera derivado de la normativa de la Unión Europea, los operadores deberán constituir un depósito, puesto a disposición de la autoridad otorgante de la autorización, por un valor mínimo de 70.000 euros cuando se utilice un solo vehículo y 20.000 euros por cada vehículo adicional autorizado. Este depósito deberá constituirse en efectivo o mediante valores de deuda pública.”

PREGUNTA PARTE A:

A la luz de la importancia del sector en la economía del país Borduria, y ante las numerosas quejas presentadas por diferentes operadores del sector del transporte terrestre de mercancías por carretera, el Ministerio de Transportes del país Borduria se está planteando la revisión del actual marco normativo, en particular en el caso del transporte público pesado de mercancías por carretera, con el fin de mejorar la productividad y coadyuvar al crecimiento.

Las autoridades del país Borduria consideran un referente normativo la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado española y desean que el nuevo marco normativo que se está diseñando se ajuste a sus postulados.

Por ello, se le solicita, como autoridad independiente, que realice un informe en el que se plantee dicha modificación normativa, en el que se incluyan al menos las siguientes cuestiones:

1. Análisis de las razones de interés general y fallos de mercado que pudieran subyacer a la regulación del sector.
2. Análisis del actual marco regulatorio. Análisis de los requisitos actualmente asociados al otorgamiento de la autorización: para el análisis de la proporcionalidad de dichos requisitos, indique la información del sector que debería ser estudiada.
3. Proponga y justifique la imposición de un régimen alternativo y los requisitos asociados al mismo, y describa brevemente el posible impacto de estas modificaciones en el mercado.

PARTE B

En el país Borduria, de acuerdo con las definiciones anteriormente facilitadas, el sector del transporte terrestre de mercancías por carretera se caracteriza económicamente por los datos presentados en el anexo (Hoja Excel).

PREGUNTA PARTE B: A la luz de los datos y la información aportados, el Ministerio del país Borduria le solicita que realice una caracterización económica del sector del transporte de mercancías por carretera lo más completa posible, analizando tanto la evolución del sector en general como su demanda.

Analice en particular la oferta del transporte de mercancías por carretera realizado por vehículos públicos pesados.

Justifique a través de la presentación de tablas anexas y/o gráficos todas las afirmaciones que realice a este respecto.

Indique asimismo qué otros datos además de los presentados en el anexo, solicitaría al Instituto de Estadística del país Borduria para completar el anterior análisis y caracterización del sector.

DATOS ECONOMICOS PAIS BORDURIA

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PIB corriente (millones de € nominales)	749,288	803,472	861,142	930,566	1,007,974	1,080,807	1,116,207	1,079,034	1,080,913	1,075,147	1,055,158
Deflactor del PIB (Tasa de variación)	4,3	4,2	4	4,3	4,2	3,3	2,4	0,1	0,1	0	0,2
Población ocupada en el país	16.991.900	17.740.500	18.490.800	19.509.200	20.195.400	20.717.900	20.055.300	18.890.400	18.674.900	18.153.000	17.396.400
Población ocupada en el sector de transporte de mercancías por carretera	336.676	354.819	372.266	398.346	401.769	424.244	417.780	382.070	361.949	340.100	322.435
Facturación del sector del transporte de mercancías por carretera (miles de € nominales)	25.260.953	28.247.828	29.822.857	33.009.076	36.351.971	38.725.417	39.975.453	33.108.840	34.224.941	34.281.515	33.176.714
Inversión en activos materiales de las empresas de transporte de mercancías (miles de € nominales)	1.899.631	1.926.247	1.907.415	2.067.530	2.281.773	2.481.866	2.866.238	1.620.822	1.690.490	2.302.655	1.618.503
Evolución de los precios de combustibles para automoción: €/litro	0,70	0,68	0,80	0,94	0,91	1,09	0,87	0,99	1,20	1,35	1,39

Mercancías transportadas (exportaciones e importaciones) por modos de transporte. Unidad: miles de toneladas

	TOTAL			CARRETERA			FERROCARRIL			MARTIMO			AEREO		
	Total	Entrada	Salida	Total	Entrada	Salida	Total	Entrada	Salida	Total	Entrada	Salida	Total	Entrada	Salida
2008	424.486	286.028	128.458	147.219	85.072	62.147	2.547	1.332	1.215	269.253	208.710	60.543	5.467	914	4.553
2009	424.616	226.785	115.831	106.506	51.594	26.912	1.781	798	983	229.684	173.752	55.932	4.645	641	4.004
2010	380.172	230.639	129.533	118.000	57.723	60.272	1.923	789	1.136	234.546	171.690	62.858	5.699	437	5.292
2011	380.766	221.652	139.056	113.692	49.131	64.565	2.006	757	1.249	240.580	171.392	69.008	4.504	242	4.282
2012	385.877	219.781	146.086	101.851	44.551	57.310	1.821	680	1.141	256.994	174.293	82.701	5.201	257	4.944
2013	386.170	210.541	155.629	108.220	46.896	61.324	2.220	914	1.306	250.556	162.501	88.055	5.174	230	4.944

Datos económicos del subsector del transporte de mercancías terrestre a través de vehículos pesados públicos

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vehículos públicos pesados autorizados	193.297	201.338	218.221	234.708	242.842	268.883	270.789	269.565	240.597	245.200	217.055	220.936	208.423
Capacidad de carga media a nivel nacional (Kg)	11.728	11.564	11.511	11.446	11.439	11.561	11.432	11.371	11.218	11.159	10.984	10.905	10.877
Número de empresas vehículos públicos pesados autorizados	70.222	71.958	71.941	73.833	74.415	75.965	74.098	72.749	68.586	68.311	64.228	63.356	60.918

Licencias comunitarias solicitadas por empresas vehículos de Bordinia pesados públicos

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Licencias comunitarias solicitadas por empresas de vehículos de Bordinia pesados públicos	22.048	25.223	25.808	26.306	27.014	27.146	27.724

Vehículos públicos pesados autorizados según edad del vehículo (a fecha 1 de enero de 2015)

	0 a 2 años	2 a 4 años	4 a 6 años	6 a 8 años	8 a 11 años	11 a 15 años	15 a 20 años	mayor de 20 años
total	21.249	19.236	13.153	37.214	48.771	37.614	19.990	11.196

Tipo de forma jurídica de las empresas de vehículos públicos pesados

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Forma jurídica													
Persona Física	50.875	51.706	52.081	53.050	53.691	53.680	52.036	49.703	46.408	45.047	42.184	40.283	38.312
Sociedad Mercantil	18.896	19.747	19.369	20.234	20.180	21.690	21.342	22.234	21.404	22.440	21.201	22.203	21.751
Cooperativa	408	431	434	469	463	494	500	494	454	487	474	502	494
Otras	83	72	57	70	81	105	220	318	320	337	359	366	361
Total	70.222	71.958	71.941	73.833	74.415	75.965	74.098	72.749	68.586	68.311	64.228	63.356	60.918

CUARTO EJERCICIO

XLIX PRUEBAS SELECTIVAS
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO
GRUPO DE MATERIAS SOCIALES

El nuevo Director General de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), una vez aprobados los Estatutos de la misma, decide desarrollar un proyecto para la elaboración del correspondiente contrato de gestión de la misma.

De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha Contra el Dopaje en la Actividad Deportiva, la AEPSAD tiene una misión fundamental, que es evitar el dopaje en el deporte de élite.

AEPSAD, por tanto, realizará los controles antidopaje precisos (análisis de orina y/o sangre), directamente (o a través de un proceso de externalización, si así se decidiera), y ello sin perjuicio de los controles antidopaje que realicen tanto las federaciones nacionales como internacionales, también competentes para ello y que tradicionalmente han venido desarrollando tal tarea.

En este sentido se produce un incremento de funciones en AEPSAD debido a que ésta asume a partir de ahora controles que antes realizaban las federaciones nacionales o internacionales. La realización de un control supone en esencia: planificación del control, toma de muestra *in situ* (orina/sangre), tratamiento de la muestra en condiciones de seguridad y confidencialidad, y envío al Laboratorio AEPSAD. En el Laboratorio una vez analizada la muestra, en caso de dar positivo se remite informe al servicio jurídico de la AEPSAD para iniciar el correspondiente expediente sancionador.

Para todo ello AEPSAD cuenta con una estructura operativa y jurídica (véase documentación aneja). En lo relativo a controles antidopaje cuenta con cuatro personas en plantilla con la titulación médica y formación precisa (Agentes de control del dopaje). Además, AEPSAD ha venido otorgando el título de Agentes de control del dopaje a un centenar de agentes en todo el territorio nacional, a quienes se contacta caso a caso para realizar los controles semanales (fútbol, atletismo, ciclismo...). No obstante, debido a la insuficiencia de medios humanos, así como el incremento de funciones señalado al asumir AEPSAD los controles que realizaban antes las federaciones, la dirección de AEPSAD considera la posibilidad de externalizar el proceso completo de controles.

En todo caso, el Laboratorio Antidopaje de AEPSAD es la única entidad homologada internacionalmente para realizar los análisis de los controles antidopaje en España (tanto sean controles realizados por las federaciones como por la propia AEPSAD) y puede cobrar para ello los correspondientes precios públicos.

Por otro lado, hay que considerar también las necesarias relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el ámbito judicial para el cumplimiento efectivo de las funciones de AEPSAD.

Asimismo se dan implicaciones internacionales de la lucha contra el dopaje, especialmente a través de la Agencia Mundial Antidopaje, así como de diversos convenios internacionales, entre los que destaca el convenio del Consejo de Europa firmado por España en esta materia.

De acuerdo con todo lo anterior, el Director convoca a su equipo de dirección para que, utilizando las técnicas precisas de gestión y de toma de decisiones y planificación, se defina un proceso de Planificación Estratégica de la AEPSAD, el cual se reflejará en el preceptivo Contrato de Gestión (Artículo 13 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos y artículo 20 de los Estatutos de la AEPSAD) y el correspondiente Plan Anual de Acción del ejercicio presupuestario en curso.

El Director le solicita que redacte una propuesta de estructura y contenidos del correspondiente Contrato de Gestión de la AEPSAD, explicitando las técnicas de gestión, toma de decisiones y planificación utilizadas para obtener el citado Contrato de Gestión.

En concreto, en la propuesta deberá:

- 1) Determinar las técnicas precisas que se deberían aplicar para la elaboración y aprobación del Contrato de Gestión de la AEPSAD, con expresión concreta en cada una de ellas de las diferentes fases de que se compongan:
 - técnica de toma de decisiones,
 - técnica de planificación estratégica y
 - técnica de gestión.
- 2) Diseñar el procedimiento de tramitación y aprobación del Contrato de Gestión, incluyendo un cronograma, preferentemente mediante un diagrama de Gantt.
- 3) Determinar y desarrollar el contenido esencial del Contrato de Gestión así como del primer Plan Anual de Acción, considerando los recursos económicos (gastos e ingresos), humanos y técnicos necesarios para el ejercicio de las funciones inherentes al citado Contrato de Gestión, tomando en consideración la alternativa de externalización de controles.
- 4) Elaborar los epígrafes esenciales que constituirían el Plan de Comunicación de la AEPSAD con los aspectos más relevantes del mismo: medios empleados, población destinataria, presupuesto.

CUARTO EJERCICIO

XLIX PRUEBAS SELECTIVAS
CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO
GRUPO DE MATERIAS JURÍDICAS

En el Ministerio de Fomento se recibe, trasladado por el de Asuntos Exteriores y Cooperación, el escrito de la Comisión Europea que figura como anexo.

En el examen y debate del escrito por parte de los órganos superiores del Ministerio se plantean una serie de cuestiones, recibiendo la Secretaría General Técnica el encargo de presentar un breve informe sobre los extremos siguientes:

1. Un cronograma de la secuencia de actuaciones que pueden derivarse del escrito de la Comisión, incluyendo las hipótesis en que el asunto llegue al Tribunal de Justicia.
2. Las actuaciones más idóneas para que los retrasos que la Comisión denuncia sean solventados por sus responsables directos en el menor tiempo posible
3. Si podría ponerse en marcha un sistema de incentivos como las subvenciones para acelerar el cumplimiento de lo que reclama la Comisión. En el caso de que fueran factibles las subvenciones, los pasos administrativos para su convocatoria y adjudicación.
4. Si es posible contratar un despacho de abogados en Bruselas para que lleve la eventual fase ante el Tribunal de Justicia y cómo se contrataría. También, cómo se coordinarían los abogados estatales y autonómicos.
5. Si finalmente se sancionara económicamente a España por el incumplimiento, ¿qué institución impondría la sanción?; ¿quién abonaría la multa?. ¿Habría posibilidad de repercutir la misma a los distintos responsables?.

Redacte el informe solicitado, fundamentando jurídicamente de forma sucinta las consideraciones y soluciones propuestas.

ANEXO



COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 24.10.2012

2012/2166
C(2012) 7379 final

Excmo. Sr. Ministro:

Me permito llamar su atención sobre la aplicación en España de la Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de la protección portuaria (DO L 310 de 25.11.2005, p. 28), cuyos artículos 6 y 7 prevén que el Estado miembro interesado apruebe las evaluaciones de protección portuaria y los planes de protección portuaria de los puertos sujetos a dicha Directiva.

El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2005/65/CE dispone que las medidas establecidas en la citada Directiva se aplican a todo puerto situado en el territorio del Estado miembro que albergue una o más instalaciones portuarias que sean objeto de un plan de protección de instalaciones portuarias aprobado con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias (DO L 129 de 29.4.2004, p. 6).

El artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2005/65/CE, establece que los Estados miembros han de fijar los límites de cada puerto pertinentes a los efectos de dicha Directiva, teniendo debidamente en cuenta la información resultante de la correspondiente evaluación de la protección portuaria.

Según el artículo 12 de la Directiva 2005/65/CE, el punto de contacto para la protección portuaria debe comunicar a la Comisión la lista de puertos afectados por la Directiva y cualquier cambio que se produzca en ella.

Las disposiciones de la Directiva 2005/65/CE han sido incorporadas al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre de 2007.

Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Plaza de la Provincia 1
E-28012 MADRID

Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique
European Commission, B-1049 Brussel - België
Teléfono: 00 32 (0) 2 298.11.11.

Mediante carta de fecha 11 de abril de 2011, España facilitó a los servicios de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva, una lista actualizada de los 67 puertos españoles afectados por la Directiva sobre la protección portuaria. De acuerdo con la carta, quedaban por realizar todavía 40 evaluaciones de protección portuaria en estos 67 puertos y las autoridades españolas no habían aprobado aún ningún plan de protección portuaria. No obstante, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2005/65/CE incorporada al ordenamiento jurídico español, el Ministerio del Interior debe aprobar la «evaluación de la protección del puerto» y el «plan de protección del puerto», de acuerdo con las disposiciones específicas de los artículos 10, apartado 6, y del artículo 11, apartado 5, del Real Decreto 1617/2007. Asimismo, las autoridades españolas se habían comprometido a que el conjunto de los planes de protección portuaria estuviese finalizado en el año 2011 y a informar de ello a los servicios de la Comisión.

Ante la falta de información en relación con las aprobaciones de las evaluaciones de la protección portuaria y de adopción de los planes de protección portuaria, a pesar de las solicitudes reiteradas regularmente durante las reuniones del Comité MARSEC, el 28 de marzo de 2012 se abrió un expediente EU-Pilot, con el nº 3224/12/MOVE, para solicitar a España que informase a la Comisión sobre la aplicación de la Directiva en la práctica, el calendario previsto o un plan de actuación para cada puerto afectado por la Directiva, en particular en lo tocante a la aprobación de las evaluaciones y a la adopción de los planes de protección portuaria.

De las informaciones remitidas por las autoridades españolas en su primera respuesta, de 1 de junio de 2012, a la presentación del expediente EU-Pilot nº 3224/12/MOVE se desprende que la aplicación de la Directiva en la práctica no ha progresado de forma sustancial desde la notificación del 11 de abril de 2011. En el caso de los «puertos de interés general», las 6 evaluaciones de protección portuaria que todavía no habían sido aprobadas en 2011 han sido aplazadas sistemáticamente a fechas posteriores (finales de 2012); asimismo, las autoridades españolas han aplazado también a finales del año 2012 la adopción de los planes de protección portuaria para esos mismos puertos. Cabe señalar que las autoridades españolas solamente han aprobado 2 planes de protección portuaria (Mahón y Melilla).

Puesto que la respuesta española ponía de relieve una diferencia de presentación entre los «puertos de interés general» (43) y los «puertos dependientes de las comunidades autónomas», ya que parecía que se habían añadido dos puertos a la lista comunicada a la Comisión en virtud del artículo 12 de la Directiva, el 12 de junio de 2012 se envió una solicitud complementaria a las autoridades españolas en el contexto del expediente EU-Pilot nº 3224/12/MOVE.

El 19 de julio de 2012, las autoridades españolas respondieron a la solicitud complementaria, enviando una lista actualizada de 26 puertos «dependientes de las comunidades autónomas», en la que se habían añadido 3 nuevos puertos, e indicaron que un puerto, que había cesado sus actividades, había sido suprimido de la lista. Sin embargo, entre los 26 puertos «dependientes de las comunidades autónomas» solo se ha realizado una evaluación de protección portuaria (Palamós). Las fechas previstas para la aprobación de las evaluaciones de la protección portuaria van del 30 de agosto de 2012 al 30 de diciembre de 2013. Ningún plan de protección portuaria ha sido adoptado para los puertos «dependientes de las comunidades autónomas» y el calendario de adopción de dichos planes de protección portuaria discurre entre el 30 de diciembre de 2012 y el 30 de julio de 2014.

Las evaluaciones de la protección portuaria son la piedra angular de la Directiva; los límites del puerto se definen teniendo en cuenta informaciones procedentes de la evaluación de la protección portuaria. Así mismo, los planes de protección portuaria son esenciales para garantizar la eficacia del sistema instaurado por la Directiva 2005/65/CE y desempeñan un papel primordial en su aplicación. A fin de conformarse a lo dispuesto en la Directiva, las evaluaciones de protección portuaria y los planes de protección portuaria para cada puerto, deberían haberse aplicado rápidamente tras la adopción de las medidas nacionales de ejecución.

La Comisión constata un retraso importante en la aplicación de las disposiciones relativas a la aprobación de las evaluaciones y de los planes de protección portuaria, tanto para los «puertos de interés general» (43) como para los «puertos dependientes de las comunidades autónomas» (26), puesto que 6 evaluaciones y 41 planes de protección portuaria aún no han sido adoptados para los 43 puertos de interés general y que solo se ha aprobado una evaluación de protección portuaria para los 26 puertos dependientes de las comunidades autónomas. En sus respuestas de 1 de junio y de 19 de julio de 2012 al expediente EU-Pilot nº 3224/12/MOVE, las autoridades españolas se han limitado a indicar un calendario de previsiones para las evaluaciones de la protección portuaria y los planes de protección portuaria que quedan aún por establecer y por adoptar.

Por consiguiente, la Comisión de las Comunidades Europeas considera que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, apartado 3, del artículo 6 y del artículo 7, que prevén, respectivamente, que los Estados miembros fijen para cada puerto los límites del puerto y aprueben las evaluaciones de protección portuaria y los planes de protección portuaria pertinentes a los efectos de la Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre mejora de la protección portuaria (DO nº L 310 de 25.11.2005, p. 28).

La Comisión invita a su Gobierno, de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a remitirle sus observaciones sobre lo que precede en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la presente.

Una vez conocidas esas observaciones o si dichas observaciones no se le envían en el plazo prescrito, la Comisión se reserva el derecho de emitir, si procede, el dictamen motivado previsto en ese mismo artículo.

Reciba el testimonio de mi más alta consideración,

Por la Comisión

Siim KALLAS

Vice-presidente



